

EL POPULISMO IMPOSIBLE Y SUS ACTORES

1973- 1976.¹

Maristella Svampa²

Introducción

Entre 1973 y 1976 la Argentina vivió uno de los períodos más controvertidos y complejos de su historia reciente, aquél que muestra el trágico pasaje de una sociedad movilizadora, caracterizada por una firme voluntad de cambio, aunque recorrida por la inquietud social, el autoritarismo y la violencia política; a una sociedad desarticulada, sumergida en una crisis plural, a la vez social y política.

Hablando rigurosamente el ciclo de movilización se abre en 1969, con el “cordobazo”, la protesta social más importante realizada contra el gobierno militar de Onganía, y se cierra en 1976, con el golpe de estado militar que desplaza el gobierno de Isabel Perón. Sin embargo, el período que va de 1973 y 1976 presenta una especificidad propia, pues encarna como pocos un punto de máxima condensación de tensiones y contradicciones, ilustrados de manera acabada por el desencuentro que se produce entre la sociedad civil movilizadora y el líder recién vuelto del exilio; por la imposibilidad de implementar con éxito el modelo populista del “pacto social” así como de encapsular todo ese movimiento social dispar dentro de los tradicionales moldes nacional-populares; en fin, por la progresiva lógica de exclusión que se va difundiendo en la sociedad argentina, y que alcanzaría verdaderos rasgos demenciales durante la última dictadura militar. Por último, la época expresa también el clímax de un *ethos* específico, consustancial a la acción de los actores centrales de la sociedad movilizadora de los años setenta, procedentes de las clases medias y de las clases trabajadoras.

El período que nos ocupa registra tres momentos de inflexión insoslayables, marcados por las presidencias constitucionales del período: el primero, el de la breve presidencia de Cámpora, entre el 25 de mayo y el 12 de junio de 1973, corresponde al momento de la movilización generalizada y triunfalista de las fuerzas sociales que asocian el regreso de Perón con la posibilidad de introducir cambios mayores. Aunque los sectores movilizadores no coinciden en los modelos de cambio, todos ellos se alimentan de una contracultura que impugna el régimen político así como los modelos sociales y los estilos culturales vigentes. En síntesis, este primer momento coloca en el centro de la escena la

¹ Artículo publicado en el libro ***Nueva Historia Argentina, 1955-1976, volumen IX, dirigido por Daniel James, Buenos Aires, Sudamericana, 2003.***

² Agradezco la minuciosa lectura crítica que Eduardo Anguita, Cristina García, Claudia Lozano y Fernanda Salgado realizaron de las distintas versiones de este artículo. Asimismo deseo agradecer la generosidad de Roberto Baschetti, quien puso a mi disposición su vasta colección de documentos y libros sobre la época. Por otro lado, por sus mismas características, este artículo oculta innumerables deudas intelectuales, pues sólo algunos autores aparecen citados en el texto y otros al final, en la bibliografía. Sin embargo, quiero recordar al lector que nuestra inspiración inicial se nutrió de otro artículo, escrito tempranamente en 1979 por J.C.Portantiero, titulado “De la crisis del país popular a la reorganización del país burgués”.

imagen de *una sociedad movilizada para el cambio*, y tiene por actores principales a la juventud, a sectores del sindicalismo combativo y a intelectuales ligados a la modernización desarrollista.

El segundo momento se extiende desde el mandato provisional de Lastiri, una vez concretada la renuncia de Cámpora, en junio de 1973, hasta la muerte de Juan D. Perón, el 1 de julio de 1974. Esta fase confronta más claramente a los diferentes actores con *las contradicciones propias del populismo en el poder. La imagen dominante del período es el de la guerra interna: Peronistas versus Peronistas*. El árbitro de este dramático juego es el propio Perón. Un primer balance de este proceso da cuenta cabal de la imposibilidad de implementar el modelo nacional- popular, tanto en el frente político como en el económico. Su análisis nos permitirá preguntarnos acerca de las dificultades de la institucionalización de las fuerzas sociales movilizadas, en una época en la cual el peronismo ocupa la casi totalidad del espacio político argentino. Veremos también cómo luego de la muerte de Perón resulta notorio el cierre de los canales institucionales a partir de los cuales se expresaban importantes actores sociales del período.

El tercer momento, corresponde a la etapa de *la agonía y disolución del modelo populista*, bajo la gestión de Isabel Perón, luego de la desaparición física del líder y de la rápida desarticulación de las fuerzas sociales anteriormente movilizadas (julio de 1974-marzo de 1976). La imagen fuerte del período es *la crisis plural, política, social y económica*. Importa señalar entonces quiénes son los actores políticos y sociales que cobran centralidad en este contexto: la acción gravitante del *sindicalismo* peronista tradicional y de sectores de extrema derecha comandados por el Ministro de Bienestar Social, José López Rega; la progresiva vacancia de autoridad, la opción por el militarismo por parte de la *guerrilla*, por último, dar cuenta del avance de los *militares* hacia el poder, acompañado de una estrategia de "relegitimación" a partir del combate contra la "subversión".

Pese a que cada momento posee rasgos específicos, atravesado por lógicas diferentes y una diversidad de actores sociales y políticos, el análisis de esas diferencias no puede hacer la economía del estudio del marco común de referencia que estructura la conducta de los actores, a saber: la crisis y colapso del modelo populista.

La Hora de la Juventud Mara villosa

Durante décadas, una de los rasgos más saltantes de la Argentina fue la división entre el sistema de poder y la sociedad civil. Esta brecha fue acentuándose hacia fines de los años sesenta, durante la "revolución argentina", encabezada por el general Onganía, un ensayo corporativo en el cual el autoritarismo y la represión política iban acompañados por un notorio proceso de modernización, tanto económico como cultural.

La modernización cultural tuvo como actor central a las clases medias urbanas y abarcó numerosos aspectos de la vida cotidiana que incluían desde nuevos hábitos de consumo especialmente orientados al sector juvenil, así como el cuestionamiento de la moral sexual y familiar tradicional, el nuevo rol de la mujer y la divulgación del psicoanálisis, hasta aquellas dimensiones asociadas a las vanguardias y la experimentación artística. Tiempos de verdadera euforia, de gozo y manifestaciones estridentes, tan bien sintetizados por los "*happening*" protagonizados por los artistas del Instituto Di Tella y

llevados a cabo en plena vía pública, buscando involucrar al espectador en la experiencia artística.

Pronto la apertura cultural iría articulándose con la exigencia del compromiso político, invadiendo no sólo la discusión política sino también la producción académica, literaria, artística y musical. Determinados hitos políticos, como la descolonización de los países del tercer mundo y, más cercanamente, la revolución cubana (1959), fueron instalando en el terreno de lo fáctico el debate en torno de la revolución, contribuyendo así al proceso de radicalización ideológica.

La modernización fue acompañada por una intensa movilización política y protesta social, a la cuál el régimen militar respondió con dosis mayores de represión. El año 1969 marcó la inflexión. Así, pese a que el general Onganía (1966-1970) había pautado la secuencia de las transformaciones que requería la sociedad argentina (el tiempo económico primero, luego el social, por último, el político), el *cordobazo* y las sucesivas “puebladas” que le siguieron abrieron por la vía de la protesta social los canales de la participación, echando por la borda las aspiraciones corporativistas del régimen militar.

Un año después del cordobazo se produjeron tres hechos mayores: en primer lugar, se operó el esperado desplazamiento de Onganía. En segundo lugar se creó “La hora del pueblo”, un acuerdo en el que coincidían las principales fuerzas políticas, desde la Unión Cívica Radical (UCRP, dirigida por R. Balbín) y el Movimiento Nacional Justicialista (MNJ, cuyo responsable en el país era el delegado de Perón, J. Paladino), hasta el Partido Demócrata progresista, el Partido Socialista, conservadores populares y bloquistas. Este acuerdo se propuso frenar la tentativa de “profundizar la revolución argentina” que propiciaba el sucesor de Onganía, el general Levingston, y reclamar a las Fuerzas Armadas una salida institucional. Por último, fue también en 1970 que la organización armada Montoneros ingresó a la escena política, produciendo uno de los hechos más impactantes del período, a saber, el secuestro y posterior asesinato de Aramburu. El hecho catapultó al centro de la escena a un grupo reducido dispuesto a “dar la vida por Perón” que procedían, en su mayor parte, de la clase media y la militancia católica. Poco tiempo después iniciaron acciones otras organizaciones armadas, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias, de inspiración guevarista (FAP), y el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, de procedencia trotskista, surgida de una escisión del Partido Revolucionario de los Trabajadores. A diferencia de los grupúsculos guerrilleros de los años 60, estas organizaciones contaban con una mayor capacidad operativa, pues podían llevar a cabo acciones tales como copamientos transitorios, atentados y secuestros.

En marzo de 1971 el gobierno pasó, finalmente, a manos del caudillo militar del período, el general Lanusse, quien lanzó el GAN (Gran Acuerdo Nacional) y abrió con ello el proceso de transición a la democracia. Esta etapa devolvió al centro de la escena política al vilipendiado general Perón, hasta entonces literalmente innombrable. Sin embargo, el proceso de transición estuvo signado por una ambigüedad mayor, pues si bien era cierto que algunos sectores importantes dentro de las Fuerzas Armadas tenían en claro que las elecciones a realizar no debían ser restringidas, las discrepancias asumían contornos dilemáticos a la hora de plantear el rol político que debía asignarse o “permitirse” al líder exiliado.

En un clima enrarecido por la violencia política y por los rumores de un posible golpe de estado, que tendría por objeto impedir la candidatura de Perón, en julio de 1972 éste

organizó con otros partidos el FRECILINA (Frente Cívico de Liberación Nacional), el que ampliado un poco más tarde se convirtió en el FREJULI (Frente Justicialista de Liberación Nacional). Finalmente, aunque Lanusse intervino para garantizar que Perón no sería proscrito, éste último decidió establecer la llamada “cláusula de residencia”, que prohibía expresamente la candidatura de aquellos ciudadanos que no estuvieran en el país antes del 25 de agosto de ese año, así como inhibía a funcionarios del gobierno con aspiraciones electorales que no renunciaran a sus cargos antes de esa misma fecha. En consecuencia, la cláusula excluía tanto a Perón como al propio Lanusse. Para el primero implicaba la obligación de nombrar un candidato-vicario; para el segundo, conllevaba la renuncia definitiva a sus conocidas pretensiones presidenciales.

Otro de los factores importantes de esta difícil transición fue la estrategia política adoptada por Perón, quien no vaciló en utilizar la creciente amenaza de la guerrilla urbana en su pulseada política con las Fuerzas Armadas y, más específicamente, contra Lanusse. Así, su lenguaje guerrillero se convirtió en un recurso disuasivo eficaz frente a unas Fuerzas Armadas, educadas en la doctrina de la seguridad nacional y siempre renuentes a la alternancia del poder, al tiempo que terminó por situar al propio Perón como la única alternativa capaz de garantizar la paz social amenazada. Fue por eso que, pese a los pedidos del gobierno militar, Perón no sólo no condenó explícitamente a las organizaciones armadas, sino que hizo todo lo posible por alentar su accionar.

En esta línea se sitúa una larga entrevista concedida en 1971 al grupo “Cine de Liberación”, que tendría gran influencia en la juventud del período. Allí Perón realizaba un llamamiento explícito a la juventud, planteando la necesidad de la “actualización doctrinaria” y el “trasvasamiento generacional” en el movimiento justicialista. Asimismo, en ese reportaje caracterizaba a las organizaciones armadas como “formaciones especiales”, concediéndoles el comando táctico en el teatro de operaciones, y reservándose para sí mismo el rol de la conducción estratégica. Por último, Perón enunciaba tres vías para la lucha: la guerra revolucionaria, la insurrección y la normalización institucional. “La guerra revolucionaria”, deslizaba a manera de clara advertencia contra el *establishment* militar, “era quizá un camino, si no había otro camino”.

En realidad, la justificación en nombre de “la violencia popular” se hallaba expandida en vastos sectores progresistas de la sociedad. La misma tuvo su punto de cristalización el *cordobazo*, luego reforzada por la respuesta represiva del gobierno militar. En efecto, la profundización de la represión política y social no hizo más que confirmar que la violencia era un recurso válido y quizá el único posible, contra un régimen autoritario y de más en más ilegítimo. Esta aceptación se ve reflejada por los resultados de una encuesta realizada por IPSA en noviembre de 1971, que daban cuenta de que el 45% de la población bonaerense justificaba la violencia guerrillera, mientras que en Rosario el porcentaje era del 51% y en Córdoba alcanzaba al 53%. En suma, la apelación a la “violencia desde abajo” encontraba una clara resonancia en diferentes sectores de la sociedad argentina, cubriendo un amplio arco de acciones que iba desde la protesta social hasta las espectaculares acciones guerrilleras.

Hacia fines de 1972 el encuentro entre una sociedad movilizada y el líder proscrito tuvo un nuevo giro, marcado por la peronización del heterogéneo campo de las izquierdas. Este conjunto reunía diferentes ramas del sindicalismo, vastos sectores del mundo intelectual y artístico -muchos de los cuáles habían alimentado férreas convicciones

antiperonistas hasta hacía poco tiempo-, amplios sectores de la juventud, sectores social-cristianos, como el “Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo” y gran parte de la nueva guerrilla urbana. En efecto, ¡cuántos intelectuales de izquierda podrían suscribir las expresiones vertidas por el escritor Julio Cortázar, antiperonista en los '50, filoperonista en los '70, quien había proferido con reciente convicción que el Frejuli era un “movimiento visceral de todo el pueblo argentino hacia el reencuentro consigo mismo”. ¡Cuántos jóvenes había que sólo conocían al peronismo desde las entrañas mismas del antiperonismo, y que en esa hora pugnaban por ser los primeros en vitorear al líder en nombre de una utopía situada en la ambigua intersección entre la Patria socialista y la Patria peronista! Todos reclamaban el retorno de Perón como condición necesaria para cualquier transformación social y política, y aún aquellos sectores que no tenían ningún interés en “peronizarse”, consideraban que sólo su retorno haría posible la pacificación nacional.

Y aun cuando nadie tuviera muy en claro cuáles serían las estrategias institucionales que adoptaría el líder, el horizonte político argentino indicaba una única alternativa: sólo el retorno de Perón podía salvar al país del caos en el cual éste tendía a sumergirse. En el lenguaje enfático de la época, Perón se había convertido en “el Hombre”: expresión en la que convergían de manera elocuente una apelación mayúscula a la masculinidad con la figura carismática del mesías. En suma, todo indicaba que Perón era el único líder capaz de aglutinar una gran parte del espectro de las fuerzas progresistas y revolucionarias, donde convergían posiciones cristianas, nacionalistas y de izquierda.

La Juventud hacia la militancia política revolucionaria

El ciclo de movilización abierto por el *cordobazo* había lanzado a los jóvenes a la arena de la protesta. En 1971, sólo dos años después del secuestro y muerte de Aramburu, la agrupación Montoneros implementaría una estrategia política dirigida a la captación y encuadramiento de la juventud, que habría de tener hondas consecuencias. Así, la agrupación, que en sus recientes comienzos no sobrepasaba la veintena de militantes, pasó a convertirse en la organización político-militar hegemónica dentro del colectivo de la guerrilla peronista (FAP, FAR y Descamisados).

Atento a dicho proceso, ese mismo año, Perón decidió incorporar al Consejo Nacional Justicialista a Rodolfo Galimberti y Francisco Julián Licastro, exteniente del ejército, como representantes de la rama juvenil. Pero fue Galimberti, que llegó a Montoneros desde la JAEN -Juventud Argentina para la Emancipación Nacional-, quien asumió su representación virtual ante Perón, constituyéndose en una de las piezas claves a la hora de la convocatoria y organización de la Juventud Peronista.

El proceso se desarrolló de manera vertiginosa. En noviembre de 1972 se organizó el primer acto de unidad de la Juventud Peronista en el Club Cambaceres de Ensenada. En junio de ese mismo año se realizó un nuevo acto en la Federación de Box, en el cual estaban presentes las diferentes corrientes de la JP. La asistencia de unas diez mil personas puso de manifiesto el rápido crecimiento, así como la clara dominación de la línea montonera. El único dirigente político nacional que asistió en carácter de orador fue Héctor Cámpora, el delegado de Perón, quien anunció “el fin del sistema demo-liberal, burgués, capitalista”. Un mes más tarde, dicha estrategia daría sus primeros frutos a través

de la formación de las JP regionales, una estructura organizativa de superficie, coordinada por Montoneros, que habría de tener un gran protagonismo en la vida política de los años siguientes.

Así, lo propio del período es esta singular e intensa experiencia de articulación político-ideológica entre una sociedad movilizadora, sobre todo en sus sectores juveniles, y una agrupación armada. Gracias a la mediación de la Juventud Peronista, este vertiginoso proceso convertiría a Montoneros, aun de manera fugaz, en una de las organizaciones de masa más poderosas del continente. La época coincidió con la ampliación del compromiso militante que, de estar circunscripto al activismo estudiantil, pasó a volcarse a los barrios y a las villas. Los repertorios de acción abarcaban desde las tradicionales manifestaciones populares hasta la violencia guerrillera, pasando por la guerra de consignas y las pintadas. De modo que la experiencia política de los militantes juveniles fue desarrollándose dentro de estructuras bastante organizadas, generalmente cerradas, siempre jerárquicas. Su formación política fue fuertemente desigual, caracterizada por un discurso saturado de referencias a la palabra del líder, sobre todo a las cartas, declaraciones y libros más recientes. En suma, la acción política de los militantes juveniles se forjó al calor de las movilizaciones, en el enfrentamiento con la dictadura, pero, sobre todo, por contraposición con los "viejos" militantes sindicales, identificados con el aparato burocrático y las estrategias de negociación y presión vanguardista.

La "montonización" ocurrida entre 1973 y 1974 (la época del "engorde") se tradujo, a su vez, en una política de afiliación masiva al Partido Justicialista. Se abrieron locales partidarios, se multiplicaron las Unidades Básicas, se intensificaron las movilizaciones barriales y villeras, en fin, se lanzó también la campaña "Luche y vuelve" a través de las pintadas. Se formó un frente de masas, sintetizado en la denominación "La Tendencia Revolucionaria", que incluía, además de la JP, el Movimiento de Villeros Peronistas (MVP), la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), la Juventud Universitaria Peronista (JUP), la Agrupación Evita de la Rama Femenina (AE) y el Movimiento de Inquilinos Peronistas (MIP).

Uno de los hechos más resonantes del período fue la masacre de Trelew, acaecida en agosto de 1972. Esta ocurrió luego de que los presos políticos confinados en el penal de Rawson, entre los cuales se contaban importantes líderes de las organizaciones armadas de izquierda, y en el marco de un vasto operativo montado por la FAR y el ERP, tomaron la cárcel y veinticinco de ellos lograron escapar hasta el aeropuerto de Trelew. Solo seis, todos altos dirigentes de las organizaciones armadas, pudieron escapar en un avión comercial previamente tomado, que sería desviado hacia Chile. El resto fue atrapado y una semana después, arguyendo un intento de fuga, dieciséis de ellos fueron asesinados en la base naval Almirante Zar en la cuál habían sido alojados. Solo tres sobrevivieron milagrosamente a las heridas. El episodio generó un gran malestar en la opinión pública y el recuerdo de la masacre, bajo la figura del martirio, fue una de las banderas de lucha más sentidas durante la campaña electoral liderada por los sectores movilizadores. Así, a las fuertes consignas que levantaba la JP, entre las cuales se destacaba, como hecho fundador, la reivindicación de la ejecución de Aramburu ("Duro, duro, duro, estos son los Montoneros que mataron a Aramburu"), se unió la promesa de vengar a los muertos de Trelew, alimentando la lista de los (jóvenes) mártires del movimiento, encabezaba por el General J.J. Valle.

En noviembre de 1972 Perón designó en la estructura del Comando MNJ, como Secretario general, a Juan Abal Medina, hermano de Fernando, uno de los fundadores y primeros caídos de Montoneros. Aunque Abal Medina era un partidario de la vía institucionalista y no tenía una relación orgánica con la agrupación armada, su solo nombramiento aportaba un nuevo gesto de reconocimiento simbólico del líder a la lucha entablada por Montoneros.

El 17 de noviembre Perón regresó luego de 17 años de ausencia. Durante su breve estadía (27 días), la residencia de Gaspar Campos, en Vicente López, fue lugar de incesantes peregrinaciones y desfiles de peronistas entre los que se destacaron las largas columnas de la Juventud Peronista, cerca de unos 100.000 militantes. El protagonismo de la juventud se acentuaría aún más durante la campaña electoral de 1973, como respuesta a la orden de “ganar la calle” que había lanzado la secretaria de Prensa, en manos de “La Tendencia”. Tocaría a la JP, luego de un primer rechazo a la candidatura de la fórmula “Cámpora-Solano Lima”, acuñar también la célebre consigna “Cámpora al gobierno-Perón al poder”. Finalmente, durante la campaña se aceptarían los vínculos privilegiados de la juventud con el delegado y candidato Héctor Cámpora, apodado “el Tío”.

Ahora bien, el breve gobierno de Cámpora se caracterizaría por el recrudescimiento de la violencia y por la acritud de los debates en torno de las diferentes concepciones del peronismo, sea la experiencia del gobierno nacional-popular, sea la de una vía "revolucionaria"; o para decirlo con vocablos de la época: la opción entre la “Patria peronista” o la “Patria socialista”.

El Primer Momento: La consagración de la Juventud (25 de mayo- 12 de junio de 1973)

El 11 de marzo de 1973 votaron 12 millones de ciudadanos, entre los que se incluían 3 millones de nuevos votantes. La fórmula del FREJULI obtuvo el 49,6%; la UCR, un 21,29%. A pesar de no haber alcanzado el 50% de los votos, la UCR reconoció la legitimidad del triunfo y no hubo segunda vuelta para la fórmula presidencial. Si la hubo en quince provincias, y también en Capital Federal, donde se impuso la UCR y Fernando De la Rúa ganó una banca de Senador.

El triunfo electoral se festejó en todo el país. Antes de la medianoche de ese “día peronista”, se levantó la prohibición de las manifestaciones, lo que produjo el retiro de los efectivos policiales. Una marea de manifestantes desembocó en la sede del comando de campaña, en la calle Oro y Santa Fe de la Capital, donde estaba apostado Cámpora, bajo un poster de Perón, escoltado por Juan Abal Medina y el dirigente metalúrgico Lorenzo Miguel. Una miríada de cánticos festivos y agresivas consignas de lucha, convergían en una sola voz.

Sin embargo, no todos los días serían tan peronistas como éste para la “gloriosa Juventud”, que había llegado al clímax de su consagración política. Solo un mes después de las elecciones tuvo que soportar una de sus primeras amputaciones: en el acto fundacional de la UES, Galimberti, acompañado por Abal Medina, pronunció un discurso incendiario llamando a la creación de milicias populares. La arenga se produjo en un momento en el cual las acciones guerrilleras habían recrudescido: copamiento del ERP en la Central Atómica de Atucha; la toma de Villa Allende, en Córdoba, por parte de la FAR, secuestros

y ejecuciones de miembros de las Fuerzas Armadas, realizadas por el ERP y por Montoneros. La ira de Perón no tardó en caer sobre los jóvenes dirigentes: tanto Galimberti como Abal Medina fueron conminados a presentarse en Madrid donde se realizó una suerte de cónclave en el cuál participaron representantes de las diferentes ramas del peronismo, entre ellos la ortodoxa Norma Kennedy, por la rama femenina, y el coronel Ossinde, (quien tendría una siniestra responsabilidad en los trágicos sucesos acaecidos meses después en Ezeiza), que terminó con la retrogradación de Galimberti. El hecho también signaría el comienzo del destierro político del entonces secretario general del MNJ, Abal Medina, quien recibiría la orden de “no innovar” hasta la llegada de Perón al país.

El 25 de mayo de 1973 fue un día de jubiloso desborde. Asistieron a la ceremonia de asunción de Cámpora una cohorte de representantes de gobiernos latinoamericanos, entre los cuales se destacaban el presidente chileno Salvador Allende y su par cubano, Osvaldo Dorticós, fervorosamente saludados por la multitud a través de cánticos y consignas de lucha. Luego de que Cámpora recibiera la banda presidencial, a cambio del Himno Nacional, se entonaron las estrofas de la Marcha peronista. El nuevo presidente pronunció un duro discurso en el cual proclamó llegada “la hora de Perón”, así como rindió homenaje a la “Juventud maravillosa”, que “en los momentos decisivos, supo responder a la violencia con la violencia y oponerse, con la decisión y el coraje de las más vibrantes epopeyas nacionales, a la pasión ciega y enfermiza de una oligarquía delirante. Cómo no ha de pertenecer también a esa juventud este triunfo –se preguntaba el presidente electo-, si lo dio todo –familia, amigos, hacienda, hasta la vida- por el ideal de una Patria Justicialista Si no hubiese sido por ella, tal vez la agonía del régimen se habría prolongado” (Baschetti: 199.).

La jornada festiva estuvo salpicada por algunas refriegas con la policía y otros incidentes de neto corte simbólico. Así, el secretario de Estado de EEUU, Williams Rogers, no pudo presenciar el acto de asunción del mando, porque una multitud que coreaba consignas anti-imperialistas, le impidió llegar hasta la sede del poder. Los miembros de la Junta Militar tuvieron que abandonar el lugar en helicóptero. Un graffíti escrito en aerosol adornaba una de las paredes de la Casa Rosada, a la que alguien había rebautizado “Casa Montonera”. No sólo la histórica Plaza de Mayo, sino también el mismísimo salón Blanco se llenó de jóvenes con camisas floridas y desabotonadas, vestidos de blue jeans y camperas, con los dedos abiertos en “v”. En medio de un confuso episodio, J.C.Dante Gullo, uno de los delegados regionales y dirigente de la JP, tomó a su cargo la seguridad del acto. Los siete delegados de las Regionales de la JP aparecieron en los célebres balcones junto con Cámpora, saludando a la multitud que no cesaba de vitorear la consigna “se van, se van y nunca volverán”. Al anochecer del día, el foco de atención se trasladó hasta la cárcel de Villa Devoto, donde se hallaban gran parte de los presos políticos de la dictadura, la mayoría ligados a organizaciones armadas de izquierda. Acompañados por una cada vez más nutrida multitud, estos exigían su liberación. Luego de apresuradas negociaciones, Cámpora resolvió firmar el indulto presidencial otorgando la amnistía general a los presos políticos, que sería aprobada dos días después por el parlamento.

Este hecho, conocido con el nombre de “devotazo”, al cuál el senador peronista Vicente Saadi no vaciló en caracterizar como “una segunda toma de la Bastilla”, merece algunas aclaraciones. Por un lado, el “devotazo” asumió el carácter de un hecho irresistible, una expresión de la fuerza de las cosas, natural corolario de un proceso histórico-social. Por el otro, legitimó, sin grandes distinciones, todas aquellas formas de resistencia desarrolladas

en contra de la dictadura. Desde esta perspectiva, conllevaba la justificación de la violencia de la guerrilla como respuesta a la violencia del Estado. Por último, para las Fuerzas Armadas y otros sectores de la derecha, no sólo ponía en evidencia la orientación ideológica del gobierno recién asumido, sino que los confrontaba a las futuras consecuencias de la liberación de los principales dirigentes de las organizaciones armadas que venían desarrollándose en los últimos años.

Mientras tanto, un clima de fiesta, plagado de declaraciones ampulosas y enfáticos juramentos, perfumaba la primavera camporista y colocaba en el centro de la acción épica a la Juventud Peronista, la que aparecía, según palabras de Cámpora, como *vanguardia de defensa del pueblo argentino*. Una muestra de este sentimiento aparecen en las declaraciones del triunfante candidato a vicegobernador de Córdoba, Atilio López: “Yo quiero señalar concretamente esta noche, donde ya mi pueblo de Córdoba, la clase trabajadora, nuestra gloriosa juventud, la vieja guardia peronista y todo el pueblo me ha consagrado vicegobernador. Yo como hombre del movimiento obrero, ya que no vengo a pedir ni vengo a plantear la necesidad del voto, *vengo a comprometerme ante mi pueblo para decir que si no se cumple, esa gloriosa juventud sepa ajusticiarme*”. (Baschetti: 1996, vol. I, p.48)

Período en el cual los peronistas ligados al ala izquierda asocian la juventud a una gesta heroica, y son pocos los que entrevén el horizonte oscuro que los acecha. Basta recordar que el propio Atilio López, quien provenía de las filas del combativo sindicalismo cordobés, sería asesinado más tarde por los escuadrones de extrema derecha, la Triple A, comandada por el ministro López Rega desde su despacho en Bienestar Social.

Entre el movimiento y la institución

La composición del gabinete que acompañaría a Cámpora daba cuenta del conglomerado de organizaciones y tendencias heteróclitas que caracterizaba al movimiento: el Ministerio de Trabajo era ocupado por R.Otero, sindicalista y hombre de la UOM; el peronismo histórico estaba representado por dos hombres de centro: A.Benítez en Justicia y Taiana en Educación. El sillón del Ministerio de Economía fue ocupado por José Bel Gelbard, paradigma de la CGE y responsable de implementar el “pacto social”. El joven Esteban Righi, estrecho colaborador de Cámpora y allegado a la JP, ocupó el Ministerio del Interior, mientras que J.C.Puig, también cercano a la Tendencia, se haría cargo del Ministerio de relaciones Exteriores. Por último, el sibilino y cada vez más influyente secretario personal de Perón, José López Rega, asumió el Ministerio de Bienestar Social.

Por estatuto, la distribución de los cargos preveía un 25% para cada rama del partido (la política, la sindical, la femenina y la juvenil). Sin embargo, la JP, que nunca dejó de vivir con cierta incomodidad y hasta contradicción la disputa por la distribución del poder, sólo obtuvo el 18%. Dos gobernadores de las provincias más importantes, Oscar Bidegain, en Buenos Aires, y Obregón Cano en Córdoba, tenían afinidades con la Tendencia. También era el caso de un bloque de diputados nacionales, entre los cuales se encontraban Nilda Garré. Por otro lado, el campo de la cultura y, más claramente, el ámbito universitario, aparecía como claramente hegemonizado por la Tendencia.

Recordemos también que, además de las leyes antirrepresivas que sancionó apresuradamente el Parlamento, otros hechos marcarían la coloración ideológica inicial del gobierno, como el discurso del Ministro de Interior a la Policía Federal, Esteban Righi, quien redefinió los deberes del cuerpo, exclamando que “el pueblo ya no es más el enemigo sino el gran protagonista”, o aquel otro del embajador Vasquez frente al Foro de las Naciones Unidas, anunciando los nuevos lineamientos tercermundistas de la política internacional.

Pero, pese a la modulación radical que se percibe en los momentos políticos iniciales, pese al vínculo privilegiado que la Juventud había desarrollado con el presidente vicario, el gobierno camporista está lejos de proyectar un escenario único en resonancia con estos actores. En efecto, más allá la puja inevitable por los espacios de poder, el gran debate que comienza a instalarse en esta época, multiplicando las escenas de conflicto, *es la demanda de institucionalización del movimiento*, planteada primero con hesitaciones desde el seno del gobierno camporista, expresada cada vez con mayor firmeza por el propio Perón, exigida, en fin, por la realidad misma de las alianzas económicas establecidas. En suma, de lo que se tratará, a pesar de las oscilaciones iniciales, es de plegar la acción de los actores involucrados a las determinaciones del gobierno recién asumido, en última instancia, a la voluntad del propio Perón.

La demanda de institucionalización atravesaba tres escenas: la propiamente económica, donde jugaban su disputa los actores corporativos; la política, en la cual se trataba de definir la relación con las organizaciones armadas peronistas; por último, la específicamente social, que daban cuenta de una sociedad movilizadora cuya participación desbordaba claramente los canales previstos por la institucionalización.

La primera gran escena coloca en el centro de las preocupaciones del gobierno nada menos que la posibilidad misma de aplicación del modelo populista, a través de la figura de la concertación social. En efecto, no hay que olvidar que, desde sus orígenes, el modelo nacional-popular implicaba una determinada forma de intervención del Estado, regulador de los mecanismos de redistribución del ingreso nacional entre, por un lado, trabajadores, representados por los sindicatos y, por otro lado, los sectores empresarios. Aludía entonces, y antes que nada, a una alianza de clases, sólo realizable dentro del marco de un “pacto social”. Este había sido el modelo que Perón había implementado con éxito durante sus dos primeros mandatos y no eran pocos los que guardaban un recuerdo idealizado de la época. Pero el paso del tiempo acusaba diferencias notorias entre ambas épocas: si hacia 1950, la participación del sector asalariado en el ingreso nacional había alcanzado su punto máximo con el 46,52%; en 1971, ésta ya se había reducido a un 38%. A esto hay que añadir que, los límites de las posibilidades redistributivas de este modelo habían ido operándose en un contexto histórico en el cual, paradójicamente, los sindicatos habían jugado un rol importante. Luego de la caída del peronismo, éstos habían extendido sus esferas de representación, convirtiéndose en un poderoso actor político y social, cuyo peso en la puja distributiva habría de ser, en muchos casos, independiente de la coyuntura económica.

El “pacto social”, suscripto por la CGT, la CGE y el gobierno, establecía el congelamiento de precios y la suspensión de negociaciones colectivas durante dos años, así como el reajuste de tarifas públicas y sólo un aumento del 20% en los salarios. Para lograr su concreción, Perón había tenido que desplegar toda su capacidad de presión e influencia sobre las huestes sindicales, sobre todo a través de la persona del leal secretario general de

la CGT, J. I. Rucci. Sumemos a esto que el incremento salarial había defraudado las amplias expectativas de la clase trabajadora, mayoritariamente peronista. En fin, los hechos posteriores, signados tanto por el aumento de la conflictividad social en un contexto de puja intersectorial, así como por la desaparición física del líder y el recrudecimiento de la violencia, terminarían por sellar el fracaso del pacto populista.

En segundo lugar, la vía de la normalización institucional, identificada de ahora en más con el gobierno electo, evocaba un núcleo irresuelto en la compleja relación entre las organizaciones armadas peronistas y Perón. Una vía que aquéllas no terminaban de rechazar del todo, aunque fuera relativizada tanto en los hechos como en las declaraciones. Así, un día antes de la asunción del gobierno, las FAR y Montoneros habían dado a conocer un documento conjunto que separaba el “gobierno” del “poder”, manifestando su apoyo al gobierno electo, pero afirmando la continuidad de la lucha armada. El 13 de junio, Cármpora recibiría a los principales dirigentes de las organizaciones armadas peronistas. La visita no tenía otro fin que exigir el acatamiento al nuevo orden, lo cual conllevaba, en primer término, la aceptación del “pacto social” propuesto por el ministro Gelbard, pieza fundamental del gobierno populista. De esta manera, por vez primera, las organizaciones armadas peronistas experimentarían la obligación de ajustarse a los moldes nacional-populares que disponía el gobierno; aceptación tan renuente y suspicaz como la que desplegarían los actores corporativos del período, especialmente la CGT.

Lejos de confiar tanto en la conducción “burguesa” de Perón, como en el carácter policlasista que ofrecía el movimiento nacional justicialista, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), organización armada de origen trokista, procedente del PRT, continuaría desarrollando acciones, aunque se encargaría de aclarar que no llevaría a cabo ataques “a las instituciones gubernamentales ni contra ningún miembro del gobierno del presidente Cármpora”

Pero la cuestión de la “normalización institucional” debió afrontar un nuevo y tercer flanco de conflicto, más de orden social que político, que remitía a la amplia movilización social que había seguido casi de inmediato a la transmisión de mando, produciendo un rápido desborde de los canales institucionales existentes. Este proceso de movilización es ilustrado de manera paradigmática por las “tomas”, hechos de acción directa que llevaron a la ocupación de hospitales, escuelas, universidades, varias comunas del interior, diarios, canales de televisión, organismos oficiales, fábricas, inquilinatos, entre otros³. Estas acciones no respondían a una conducción unificada e involucraban actores de variado tipo, desde individuos desarraigados hasta funcionarios de gobierno, desde activistas y simpatizantes del ala izquierda hasta, en algunos casos, militantes de la derecha peronista. Muchas eran realizadas en nombre de la lucha “anti-continuista”; otras, con el objetivo de desarrollar propaganda armada. La movilización alcanzó picos de verdadera insurrección; así entre el 4 y 15 de junio se produjeron casi 500 tomas de distinto tipo en todo el país y se han calculado unas 2000 para el período de referencia.

Las tomas fueron muy difundidas por los órganos de prensa, muchos de los cuales no ocultaban el desagrado que les provocaba la inacción del gobierno. Aunque el ministro Righi había saludado a esos hechos como “saludables”, al considerarlos como efecto de la descompresión política, es claro que la situación habría de generar ambivalencias que

³ Para el tema, hemos seguido el trabajo de Flavián Nievas, “Cármpora: primavera-otoño. Las tomas”, en A. Pucciarelli editor, *La primacía de la política*, op.cit., pp. 351-393.

prontamente se convirtieron en dilemas insostenibles. Las tomas marcaron entonces un primer punto de conflicto y, a la vez, de separación entre el peronismo en el poder y la sociedad movilizada. Por un lado, los actores intervinientes en las tomas coincidían en afirmar que el gobierno popular abría un nuevo período histórico. Así, sucedía que muchas de las ocupaciones se realizaban en nombre del gobierno popular y, en numerosos casos, con la genuina intención de fortalecerlo. Por otro lado, a través de ellas, comenzaban a advertirse notorias discrepancias acerca del contenido y del sentido que había que dar a la etapa que se abría. Diferencias percibidas con claridad, aún si muchos de los protagonistas de estos eventos, desde el ala izquierda, no pudieran traducirlas en términos claramente programáticos e institucionales. Por su parte, como hemos dicho, el gobierno, aun buscando a tientas la vía de la institucionalización, tenía un claro programa que era además una doctrina: el pacto social.

Los grandes actores corporativos no tardaron en manifestar su disconformidad respecto de las tomas. Por supuesto que la “tolerancia complaciente” del gobierno contribuyó a generalizar la imagen de descontrol y caos social que prontamente habría de reprocharse a la gestión de Cámpora. Tanto desde la izquierda como desde la derecha, no serían pocos los que verían reforzada su convicción de que se hallaban frente una “situación pre-revolucionaria”. Sin embargo, la movilización fue desactivada. No es casual que la presión por terminar con la fase de efervescencia popular fuera mayor aquellos días en que se definía la firma del pacto social. Finalmente, el 14 de junio, el todavía secretario general del MNJ, Juan Abal Medina, utilizando la Cadena Nacional de Radiodifusión, exhortó a poner fin a las tomas. Dos días más tarde, la JP apoyaría el pedido, a través de un documento avalado por todas las regionales.

En suma, el rápido proceso de efervescencia ligado a las tomas, así como su forzada desactivación, constituye sin duda uno de los hechos centrales del período, y tiende a marcar un nuevo movimiento, de separación en este caso, en la dinámica de la relación entre un sistema político en recomposición y la sociedad civil movilizada.

El retorno de Perón

Con el peronismo en el gobierno, el operativo de retorno del líder estaba en marcha. El operativo había sido puesto en manos de una comisión especial en la cual operaban personajes oscuros de la derecha peronista como los ya nombrados Osinde, y Norma Kennedy, además del propio Secretario General de la CGT, J.I. Rucci. También estaban Lorenzo Miguel y Juan Abal Medina, aunque éstos dos últimos tuvieron escasa participación. Por otro lado, estos preparativos hicieron cada vez más notoria la múltiple influencia del secretario de Perón y actual ministro de Bienestar Social, José López Rega. Ya en los últimos meses de la estancia de Perón en Madrid, la hegemonía de este personaje rasputinesco se había tomado indiscutible.

La JP y las agrupaciones armadas peronistas fueron marginadas de la organización del acto de recibimiento que se realizaría en Ezeiza. Pese a ello, sumergidos en una obsesión estadística que pronto se estrellaría contra la propia voluntad del líder, la conducción de Montoneros y de la JP colocó todo su empeño en la movilización de las bases, confiando en que esta demostración de fuerza les daría el lugar que les correspondía

en el movimiento. Fue, sin lugar a dudas, la mayor concentración de la historia política argentina. Más de dos millones de personas entre las cuales se encontraban interminables columnas de la JP, marcharon hasta el aeropuerto de Ezeiza, pero el encuentro gozoso con el líder no tendría lugar. Desde el palco, donde todavía podían verse algunos artistas, grupos de extrema derecha, que portaban armas largas y estaban bajo las órdenes de Osinde y Rucci, comenzaron a disparar contra la multitud. Pronto se desató la tragedia y la gente, en medio del terror y el desconcierto, comenzó a dispersarse y retroceder, buscando amparo entre los árboles o en los edificios allende al aeropuerto. Las estadísticas finales dan cuenta de trece muertos y trescientos ochenta heridos. Algunos asistentes fueron atrapados y torturados en el Hotel Internacional por grupos, que por su accionar e ideología anticipaban la Triple A. Finalmente, el avión que transportaba a Perón, aterrizó en el aeropuerto de Morón.

Al día siguiente, un Perón “desencarnado” pronunciaría un contundente discurso en el cual, omitiendo cualquier referencia directa a los hechos de Ezeiza, realizaba un llamado a “volver al orden legal y constitucional, como única garantía de libertad y de justicia”. Desde allí, lanzaría una clara advertencia a la Juventud, advirtiéndole que “no hay nuevos rótulos que califiquen a nuestra doctrina ni a nuestra ideología. Somos los que las veinte verdades peronista dicen. No es gritando “la vida por Perón” que se hace Patria, sino manteniendo el credo por el cual luchamos. Los viejos peronistas lo sabemos. Tampoco lo ignoran nuestros muchachos que levantan banderas revolucionarias. Los que pretextan lo inconfesable, aunque cubran sus falsos designios con gritos engañosos o se empeñen en peleas descabelladas, no pueden engañar a nadie.”.

Deténgamos un instante aquí porque la inflexión es de talla. En la práctica política del líder, el Movimiento Nacional Justicialista era, sobre todo, el arte de la contradicción discursiva. En efecto, con el correr de los años y las generaciones, el discurso de Perón fue transformándose en una especie de libro sagrado en cuyas páginas siempre era posible hallar, para una misma pregunta, dos sentencias diferentes, generalmente contradictorias entre sí. Tanto la izquierda como la derecha del movimiento habían sabido explotar esta característica propia del discurso populista, para autentificar sus posiciones y proceder a la descalificación del otro. Sin embargo, hasta ese momento, la Juventud no se había visto obligada a realizar una sobreinterpretación de sus palabras; sólo se había limitado a glosar una parte del discurso del líder, aunque a veces buscara explicitar lo que la palabra sugería o tratara de unir lo que otros separaban, amplificando los nexos entre aquellos temas que atravesaban los debates de la época, como aquél entre “el socialismo” y “lo nacional”.

Lo novedoso aquí es que Perón, un día después de su retorno definitivo, se despojó de toda ambigüedad y estableció un corte, cuya sustancia difería sensiblemente de aquél que esperaban los sectores juveniles y las organizaciones armadas peronistas. Y por mucho que éstos tardaran en reconocer las consecuencias del final del doble discurso, una cascada de hechos, cada vez más convalidados por las diáfanas palabras de Perón, se encargaría de desmentir el tortuoso ejercicio de sobreinterpretación al cual se verían librados.

Por otro lado, con Perón presente en el país, pronto el gobierno de Cámpora se tomaría insostenible. A los sucesivos desaires del líder, se agregarían las crecientes presiones provenientes del sector que lideraba López Rega. La crisis desembocaría con la renuncia de Cámpora y del vicepresidente Solano Lima, el 12 de julio. Una maniobra poco prolija habilitó a Raúl Lastiri, entonces presidente de la Cámara de Diputados y yerno de

López Rega, a reemplazar a Cámpora. La transición estaba en marcha. Pronto Perón volvería calzar nuevamente la banda presidencial.

El segundo momento: Peronistas versus Peronistas (junio de 1973-julio de 1974)

Perón y el sindicalismo: la recomposición de un vínculo perdurable

El acceso de Perón al gobierno volvería a colocar en manos del líder la posibilidad de recomponer el perdurable vínculo con el actor sindical, así como de redefinir la relación con los díscolos representantes de la juventud y las organizaciones guerrilleras. De manera concreta, el gobierno abría la vía para la consolidación de un equilibrio más firme y estable entre el peronismo y los otros actores en juego. Veamos en primer lugar su relación con el poder sindical, para luego abordar los lazos con los sectores de izquierda.

Durante el exilio, la relación con el sindicalismo no había estado exenta de conflictos ni de amenazas de heterodoxias. La gestión verticalista del líder se había encaminado a la construcción de un equilibrio tensional, que apuntaba al disciplinamiento de los sindicatos, afirmado como “poder social”, tan proclive a las negociaciones informales a espaldas del propio Perón y, al mismo tiempo, a la convivencia *non sancta* con los gobiernos de facto. No por casualidad Perón había decidido incentivar la acción de las vanguardias armadas, sus “formaciones especiales”, enfatizando la necesidad del trasvasamiento generacional. Fue en este contexto, marcado por relaciones de poder inestables, que la figura del enemigo interno, comenzó a tomar niveles inusitados de virulencia. El asesinato del propio Vandor, llevado a cabo por Montoneros en 1970, pero instigado por Perón, aparece así como una de las tantas expresiones de esta dialéctica perversa que marcó la gestión del liderazgo de Perón durante el exilio.

Ahora bien, a diferencia de otros actores de la época, los sindicalistas contaban con una experiencia histórica más que suficiente como para entender a cabalidad algunas de las consecuencias del pasaje de Perón desde la oposición al gobierno. Por otro lado, éstos eran conscientes de las implicancias que en términos redistributivos traería una política de concertación social, poco favorable para los sectores populares.

Sin embargo, la redefinición del vínculo no suponía exclusivamente un llamado al sacrificio, el que, en todo caso, se realizaba menos en nombre del modelo nacional-popular que de la disciplina y la lealtad, las dos virtudes cardinales del justicialismo, pues el regreso definitivo de Perón estuvo marcado por un viraje en la política interna del movimiento. En el plano simbólico, pronto se destacó el reconocimiento de Perón hacia los “viejos peronistas”, a quienes había denostado hasta hacía poco tiempo, y que de ahora en más no cesaría de elogiar, contraponiéndolos respecto de la “muchachada apresurada”. También aparecía en la reafirmación de la clase trabajadora organizada como “columna vertebral del movimiento. En suma, este giro hacia la derecha, anunciado en los últimos meses, fue interpretado por los sectores del sindicalismo burocrático, como una expresión de la voluntad del líder de *volver a poner a las cosas en su lugar*.

Por otro lado, la burocracia sindical mantenía graves conflictos con las corrientes del sindicalismo combativo que, en nombre del basismo y de la autonomía sindical,

fomentaban formas de acción clasistas. Este tipo de sindicalismo era representado de manera ejemplar por los cordobeses A.Tosco (sindicato de luz y Fuerza) y René Salamanca (Smata). En este frente de conflicto, Perón, que no compartía la tolerancia que había caracterizado al gobierno de Cámpora, se dispuso a apoyar a la ortodoxia sindical, para lo cual impuso una política de control y represión de los conflictos intra-sindicales. Expresión de esto fue la nueva ley de Asociaciones profesionales (ley 14.455), aprobada en enero de 1974, que aseguraba el monopolio de la representación a las estructuras de mayor agregación, en detrimento de aquellas descentralizadas, de implantación local, e independientes de la conducción de la CGT. Más simple, el encuadramiento del sindicalismo peronista, suerte de revalidación de la antigua alianza, se tradujo en beneficios tangibles de diverso orden.

Pero, la esperada firma del pacto social no se tradujo por una disminución de la conflictividad social. Si las demandas de aumento salarial decrecieron, todavía quedaban vigentes otras reivindicaciones que portaban sobre las condiciones de trabajo y la democratización sindical. Por otro lado, pese a que Perón había anunciado la ejecución de un Plan Trienal y afirmaba haber controlado la inflación, en los primeros meses de 1974 el pacto social sufrió un primer revés cuando los empresarios renunciaron a absorber el costo de la inflación importada por la crisis internacional del petróleo. A esta falta de confianza en el modelo instrumentado, se sumó el reclamo de los sindicatos que, presionados por las bases frente a la caída del salario real, exigieron un aumento salarial en relación al incremento de los precios. En marzo de 1974, Perón llamó a una Gran Paritaria, en la cual actuó como mediador, debido al desacuerdo existente entre las organizaciones sindicales y el empresariado. Los sindicatos obtuvieron así un aumento salarial del 13%, pero los empresarios hicieron caso omiso del límite expresamente autorizado por el Ministerio, trasladaron el incremento salarial a los precios. Por otro lado, la economía populista era asolada no solo por la inflación y la creciente puja intersectorial, sino también por el desabastecimiento de productos básicos y el desarrollo del mercado negro.

El último discurso público de Perón, pronunciado el 12 de junio, debe haber sonado a amarga despedida en los oídos de la dirigencia sindical, atenazada cada vez más entre el dilema de la lealtad y las demandas de un sindicalismo reivindicativo. En su tradicional lenguaje de guerra, Perón los trató de “minorías irresponsables”, acusándolos de “sabotear la reconstrucción nacional”, de no respetar el acuerdo, pese a haber concertado en dos oportunidades (en junio del 73 y, con la Gran Paritaria, en marzo del 74). Por último, el 17 de junio, en una alocución mantenida en Casa de Gobierno, Perón exhortó nuevamente a los representantes de la CGT a no romper el Pacto social y prometió el pago de un aguinaldo completo para julio de ese año.

El cerco a la izquierda: las palabras y los hechos

Las dificultades que tuvo que afrontar el tercer gobierno de Perón se desplegaban en más de una escena. Una vez lograda la concertación social, desactivada la ola de ocupaciones y asegurada la transición en manos de Lastiri, el propio Perón se encargaría de imprimir un giro radical a su relación con los representantes de “La Tendencia”. Así, el discurso en torno de la necesidad de la “institucionalización” estaba orientada en gran parte

contra el ala rebelde del movimiento. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que la posición asumida por el líder implicaba un viraje mayor, pues por primera vez en la historia del movimiento justicialista, antes que proponer una integración, que sabía de antemano forzada, Perón apuntaba a la abierta exclusión de toda una corriente interna⁴.

Este desencuentro con el líder sería, para muchos militantes de izquierda, política y existencialmente, dramático. En realidad, la primera gran tragedia del peronismo se jugó aquí, entre estos militantes desgarrados entre su adhesión a Perón, que contradecía abiertamente sus aspiraciones y renegaba de ellos, y la voluntad siempre actual de radicalizar el peronismo. La historia de este desencuentro puede seguirse paso a paso a través de los discursos del propio Perón: primero aparecen las advertencias, deslizadas en tono edificante; luego una incontenible serie de descalificaciones (“idiotas útiles”, “infiltrados”) acompañada del efectivo proceso de exclusión de la izquierda peronista del espacio político. Por último, sobrevino la abierta y escandalosa ruptura.

El primer discurso de Perón, luego de los sucesos de Ezeiza, estampó con todas las letras, el reconocimiento a las organizaciones sindicales y a los viejos militantes peronistas. Por vez primera, Perón situó también a la izquierda peronista en el lugar de “enemigos embozados, encubiertos o disimulados”. Por último, se encargó de aclarar la verdadera concepción del justicialismo: “Somos lo que las 20 verdades justicialistas dicen”.

A esta primera redefinición del campo político-ideológico, las fuerzas nucleadas en La Tendencia habrían de responder, en primer lugar, con la *teoría del cerco*, suerte de lectura conspirativa que pretendía desresponsabilizar al líder, colocando el centro de las verdaderas decisiones fuera de éste. La teoría del cerco ofrecía dos versiones que, aunque complementarias, deben ser diferenciadas: la primera era la versión “mágica”, que identificaba al “entorno” y más precisamente al “brujo López Rega” como el verdadero responsable de las desacertadas decisiones que iría adoptando Perón. La segunda era la versión “ideológica”, que señalaba como último responsable de los acontecimientos al imperialismo, en consonancia con el “cerco internacional” militares recientemente instalados en países limítrofes. Esta última lectura que se venía tendiendo sobre diferentes naciones latinoamericanas, ilustrado por los regímenes cobraría mayor fuerza después de la caída de Allende en Chile, ocurrida en septiembre de 1973.

Los hechos se fueron sucediendo con celeridad. Un mes después de la masacre de Ezeiza, Montoneros organizó una movilización hasta la residencia de Gaspar Campos, donde se alojaba Perón. Esa marcha, en la cual participaron unos 80 mil jóvenes de la JP, se proponía algo más que el restablecimiento de los canales de comunicación directos con el líder (romper “el cerco”). En realidad, a través de una demostración palmaria del poder de movilización, el objetivo final no era otro que el de presionar a Perón y recuperar así una posición de fuerza. Un Perón sonriente se encargó de recibir sólo a cuatro de los dirigentes de la JP, luego de desairarlos en Gaspar Campos, y obligarlos a marchar hasta la residencia de Olivos. Perón posó para las fotos y se comprometió a mantener un contacto directo y fluido con la JP. Sin embargo, aún antes de finalizada la desconcentración, los dirigentes de

⁴ Ciertamente que entre 1946 y 1947 Perón tuvo importantes conflictos con dirigentes del Partido Laborista que llevaron a la exclusión, entre otros, del máximo dirigente de la CGT, Luis Gay. Pero contaba también con el apoyo de conspicuos miembros del movimiento sindical, que no estaban dispuestos a desaprovechar el rol que les proponía Perón, aún a costa de la autonomía del movimiento.

la JP se enteraron por la agencia oficial TELAM que el mismísimo López Rega acababa de ser designado como mediador entre Perón y la Juventud.

Sin embargo, como lo avalan ciertos “documentos de coyuntura” de las organizaciones peronistas, el desencuentro con Perón suscitó una interpretación más realista y crítica del proceso político en curso, en la cual se subrayaba el “carácter mágico” y la inexistencia del cerco. Este reconomiento les llevaría a afirmar que “Perón nos ofrece como prenda de negociación. Sus negociaciones para lograr la unidad nacional y sus negociaciones con el imperialismo, tiene como elemento de entrega, de “buena voluntad”, a nosotros.” (Baschetti: 1997, vol. 1, p. 278)

Por último, todos los esfuerzos interpretativos se vieron acompañados por *la afirmación de la legitimidad y del carácter peronista de las acciones de la Tendencia*. Dicho de otro modo, de las declaraciones y las demostraciones de fuerza resulta claro que no habría renuncia ni podía haber expulsión. En fin, la inminencia de la ruptura aceleró el proceso de las identificaciones a partir del cual la Tendencia, especialmente a través de Montoneros, buscaría presentarse como el auténtico representante del pueblo.

El 23 de septiembre la fórmula que llevaba a Perón como presidente y a su esposa, Isabel como vicepresidente, obtuvo el 62% de los votos. Dos días después, el grupo Montoneros asesinó a Rucci, secretario general de la CGT, asestando así un duro golpe al propio Perón, en lo que no podía ser leído sino como una suerte de “chantaje político”. Al decir del poeta Juan Gelman, fue como “tirarle un cadáver a Perón sobre la mesa”...

En octubre de ese mismo año también se llevó a cabo el Operativo Dorrego, una acción civil entablada por las Fuerzas Armadas, encabezadas por el general Carcagno, junto con la JP y Montoneros, en favor de sectores perjudicados por las inundaciones. El hecho sirvió para reavivar –fugazmente- las expectativas de una posible alianza entre el Pueblo y el Ejército. Sin embargo, luego de la asunción de Perón, el general Carcagno, representante del “profesionalismo comprometido”, sería reemplazado por aquellas posiciones identificadas con el “profesionalismo neutral” (Rouquié: 1982).

El viraje de Perón tendría su correlato en una acelerada purga ideológica, que marcaría el eclipse de la Tendencia en varios frentes, comenzando por el ala político-institucional. Esto ocurriría durante el agitado verano de 1974. Los primeros afectados fueron los diputados peronistas ligados a la Tendencia, quienes se vieron obligados a renunciar a sus bancas, después de mantener una tensa conversación con Perón, en la que manifestaron su rechazo a tres medidas que propiciaba la Cámara de Diputados, (también condenadas por la JP): la ya citada ley de asociaciones profesionales, la ley de prescindibilidad, cuya amplia aplicación permitía convertirla en un arma de disciplinamiento político, y la ley de reforma del Código Penal, que denunciaban por su carácter indiscriminado, pues diluía peligrosamente la frontera entre el delito y el accionar de cualquier organización no reconocida legalmente. Pese a la renuncia, dichos diputados fueron expulsados del Movimiento Peronista.

El 20 de enero de 1974, un importante hecho de violencia vino a operar un nuevo giro, cuando el ERP atacó el Regimiento de Azul, y terminó con la vida, entre otros, del jefe del mismo. Un Perón, vestido con uniforme militar, se encargó de repudiar el hecho, al tiempo que aprovechó el golpe para responsabilizar al gobernador bonaerense O. Bidegain, a quien acusó de haber asumido una actitud desaprensiva. Bidegain fue desplazado y en su

lugar quedó el vicegobernador, un hombre del riñón del sindicalismo vandorista, Victorio Calabró. El hecho sirvió también para endurecer la posición del gobierno en relación al conjunto de leyes represivas que estaban siendo tratadas por el Parlamento, al tiempo que dio la posibilidad a Perón de iniciar una política de reconciliación con el ejército. No había pasado un mes cuando el jefe de la policía cordobesa, teniente coronel A. Navarro, se rebeló contra el poder civil y derrocó al gobernador Obregón Cano. A pesar de que las autoridades nacionales condenaron el “navarrazo”, la intervención federal que finalmente le siguió, no buscó restituir en sus funciones a los gobernantes desplazados.

La purga también alcanzó tempranamente a la Universidad de Buenos Aires, considerada un bastión de la izquierda peronista, cuando en octubre de 1973, el ministro de educación O. Taiana pidió la renuncia del rector Rodolfo Puiggrós, uno de los representantes históricos del revisionismo populista de izquierda.

En suma, el ala política era desplazada de los puestos de gobierno, reduciendo de manera significativa los frentes de lucha. Mientras tanto, la agrupación Montoneros, que había logrado integrar otras organizaciones armadas peronistas, buscaba evitar la confirmación de la ruptura, renovando a través de las declaraciones su compromiso con el movimiento peronista. Finalmente, el 13 de marzo, en un acto realizado en Atlanta, la conducción nacional de Montoneros caracterizó “*la traición del gobierno*” en dos planos, el político (ilustrada por la remoción de los gobernadores afines) y el económico (el pacto social). Por último, convocó a los militantes a un encuentro con el líder para el primero de mayo. “Allí debemos llenar la Plaza –decía Firmenich-, para decirle al general lo que pensamos, todo lo que discutimos continuamente en nuestros lugares de trabajo. Todo el esfuerzo de reencauzamiento de este proceso, y así seguiremos siendo fieles a nuestra consigna de que viviremos *libres o muertos pero jamás* esclavos, y que con todo lo que significa gritaremos hasta el final, *¡Perón o Muerte! Viva la Patria*”. (Baschetti: 1997, vol, 1, p. 556).

Volvamos un instante sobre la significación que tuvo para Montoneros y, de manera más general, para la Juventud peronista, esta apelación al diálogo, como último recurso, antes de la ruptura final. Es innegable que el “diálogo directo” entre el líder y las masas constituía uno de los núcleos centrales del imaginario peronista, pues remitía al hito fundador del movimiento, el 17 de octubre de 1945, cuando las masas reunidas en la Plaza de Mayo reclamaron la vuelta del coronel de los trabajadores, sellando en un corto diálogo lo que sería sin duda el inicio de una alianza perdurable. El calendario peronista instituyó luego la fiesta del primero de mayo como la fecha en que el pueblo y el líder “dialogaban”, y renovaban así su compromiso. Sin embargo, el diálogo había sido también uno de los ejes del imaginario de la relación con Eva Perón, modelo ejemplar de la izquierda peronista. ¿Acaso, entre los militantes, alguien podía olvidar aquel largo, sufrido y dialogado acto de renunciamiento Evita a la vicepresidencia, en 1951, que no tuvo como escenario central la Plaza de Mayo, sino un palco levantado por la CGT en la Avenida 9 de julio? Así, su sola evocación traía al recuerdo que, en la historia del peronismo, no todos los “diálogos” habían alcanzado la forma ritualizada de un reencuentro feliz entre el líder y las masas.

Ahora bien, en los ’70, la reivindicación del diálogo como modalidad fundacional del vínculo entre Perón y el Pueblo encontraba afinidad con una serie de prácticas constitutivas de la experiencia política de la JP, como lo muestran paradigmáticamente los actos políticos de la época, en los cuales era habitual que los oradores fueran interrumpidos

por algún participante o por la multitud, para corear una consigna determinada. La revista *El descamisado*, el órgano de Montoneros, se había encargado de ilustrar lo esencial de la dinámica de relación, utilizando la estructura del “diálogo” a la hora de reproducir los discursos de sus dirigentes.

Esto aparece asociado también a la centralidad que La Tendencia otorgaba a las movilizaciones populares, reforzada por la “obsesión estadística” que atraviesa la época, como si el triunfo de una estrategia política dependiera, en gran parte, de la cantidad de columnas movilizadas. En otros términos, el papel jugado por la Tendencia en las movilizaciones potenció aquella imagen de poderío en la cual convergían recursivamente el afán de protagonismo y la arrogancia juvenil. Ensoberbecidos por el cántico de sus propias consignas, no quisieron o no pudieron interpretar uno de los apotegmas centrales del ideario peronista, que el propio Perón desarrolló en los cursos que dictara en la Escuela Superior Peronista en 1949, y repetida hasta el hartazgo en los tempranos setenta: “Las masas no valen ni por el número ni por la capacidad de sus componentes: valen por la clase de dirigentes que tienen a su frente”.

El encuentro decisivo tendría lugar el primero de mayo en la histórica plaza, ocasión en la cuál el pueblo, representado por la JP y Montoneros, “dialogaría” con el líder. Ese día, las pancartas de Montoneros ocuparon los lugares estratégicos frente a los balcones de la Casa Rosada. El cortejo que acompañaba a Perón, entre los que se destacaba su esposa Isabel y el ministro de Bienestar Social, fue recibido con hostilidad por la multitudinaria juventud, estimada en unas cincuenta mil personas, que comenzó a corear “Qué pasa, qué pasa General/ qué está lleno de gorilas/ el gobierno popular”; “Se va acabar, se va a acabar/ la burocracia sindical”. En uno de los discursos más breves que se le conocen, un Perón desencajado tildó a la multitud vociferante de “imberbes” y “estúpidos”. Como respuesta, las columnas de la JP comenzaron a abandonar la Plaza al canto de “Conformes, conformes General/ Conformes los gorilas, el pueblo va a luchar”, y “aserrín, aserrán/ es el pueblo que se va”. El desencuentro marcó la consumación de la ruptura. Sucedió en la histórica plaza, ahí donde Montoneros “buscó articular la palabra pero Perón no escuchó sino gritos” (Sigal y Verón: 1987).

Poco después, Montoneros registró un desprendimiento importante, la autodenominada JP Lealtad, que postulaba el acatamiento al líder. El 25 de mayo de 1974 Perón disolvía por decreto la rama juvenil del Partido Justicialista.

La cultura, entre el “y” y el “o”.

El viraje derechista del gobierno iba inficionando todos los niveles. En abril de 1974, Perón designó al comisario Villar al frente de la Policía Federal. Un mes más tarde, se otorgó al ministro López Rega, entonces cabo, el grado máximo de la fuerza, el de comisario general, saltando doce grados en el escalafón. Así, el breve gobierno de Perón abrió el camino para la generalización de una serie de procedimientos autoritarios que irían desde el cierre de publicaciones políticas y culturales de izquierda, hasta la abierta censura en los medios de comunicación y la confección de listas negras dentro del ámbito artístico, una de las características más notorias del gobierno isabelino. Esos procedimientos que combinaban, de manera singular, la acción policial con la parapolicial de los grupos de

extrema derecha, enquistados en el gobierno, aparecían ligados al núcleo de poder del Ministro de Bienestar Social.

En el campo de la cultura, el giro a la derecha comenzó a traducirse en inquietantes señales. Época en la cual una profusión de manifestaciones proyectaban en el centro del debate ideológico las posibles articulaciones entre la “Patria Socialista” y la “Patria Peronista”, colocando el acento en la distancia instalada entre la conjunción (el “y”) y la oposición (el “o”).

A fin de ilustrar el “clima de época”, pasaremos revista al diario *La Opinión*, dirigido por el periodista Timermann, el que supo combinar de manera magistral el oportunismo político con el eclecticismo cultural-ideológico. Una breve ojeada sobre el caliente mes de enero de 1974, reflejaba la centralidad que los tópicos ligados a “lo social” y “lo nacional” tenían en la cultura de la época. Así, el 3 de enero de 1974 *La Opinión* anunciaba el estreno de *Ceremonia*, “una insólita realización argentina” de Néstor Lescovich, donde “el ojo impúdico de la cámara” registraba a marginales en distintas situaciones, que habían aceptado ser filmados a cambio de algo de comida y de vino. El teatro Municipal General San Martín programó en la sala Lugones un ciclo “de corte humanista y cristiano como contribución a la reconstrucción del ser nacional”, con la proyección de filmes como *Don Segundo Sombra*, de M. Antín; *Güemes*, de L. Torre Nilsson, y *Juan Moreira*, de Leonardo Favio.

Ese mismo año se proyectarían más de treinta filmes de pronunciado corte político-ideológico entre ellos *La Hora de los Hornos*, de Fernando Solanas y Octavio Gettino (que sería visto por unos 300 mil espectadores, entre 1968 y 1973); *Operación Masacre*, basado en el libro de Rodolfo Walsh; *Voto más fusil*, del chileno Helvio Soto, *Estado de Sitio*, de Costa Gavras, *Amor y anarquía*, de Lina Wertmüller.

Uno de los artículos centrales del suplemento cultural de *la Opinión*, del 13 de enero, estaba dedicado al tema “La guerra de las consignas”. Firmado por Alberto Szpunberg, allí se afirmaba que “la consigna justa tiene la fuerza del grito –de dolor o de victoria- y simultáneamente la estrictez de una orden”. El autor recordaba también que “la P encimada sobre la V bastaron para identificar y expresar millones de argentinos”, las diferentes ofertas ideológicas existentes en la época. En la misma página, el ensayista Ernesto Goldar anunciaba un libro sobre “La descolonización ideológica”, donde respondía a la cuestión de “si se puede ser peronista y marxista o hay que ser peronista o marxista”. Un tal R. Ferrero explicaba en un libro sin sello editorial que, aún en sus manifestaciones de izquierda, el sionismo estaba supeditado al imperialismo. En la misma página, a la derecha, se publicitaban dos libros de Perón. En fin, editorial Corregidor anunciaba la salida del que sería el primer libro de Osvaldo Soriano, *Triste, solitario y final*. En la contratapa del suplemento de cultura *La Opinión* se reproducía un artículo del frankfurtiano Herbert Marcuse, cuya obra aparecía indisociablemente ligada a la revuelta que había conmovido los cimientos políticos y culturales de la sociedad francesa en mayo de 1968. El título, “Para terminar con el capitalismo”, era más que elocuente.

El diario de esa semana consignaba también que el 8 de enero la policía había secuestrado libros de autores argentinos y detenido a varios librereros y empleados de la calle Corrientes. Sin contar con una orden judicial que autorizara el allanamiento, el mismo había sido llevado a cabo por la “sección de moralidad” de la Policía Federal, que dirigía el comisario Margaride, el mismo que había ocupado ese cargo en los tiempos de Onganía.

Pero no sólo sorprendía la ausencia de instancias legales o los residuos autoritarios que el gobierno había “heredado”. Este nuevo atentado contra la libertad de expresión recordaba, sospechosamente, aquel otro realizado contra el Teatro Argentino, cuando se ensayaba la versión teatral del filme “*Jesucristo Superestar*”, controvertida recreación artística de la vida de Jesús. El 31 de diciembre de 1973, recordaba siempre el mismo diario, seis sujetos habían sido aprehendidos mientras trataban de entrar en las oficinas de *Cinema Internacional*, distribuidora del citado filme, a la cual denunciaban como un producto de “una confabulación judía”.

En tono de sorna, en un sugestivo artículo aparecido por esos mismos días en *La Opinión*, Aída Bortnik reflexionaba sobre la proliferación de revistas políticas, deslizándose que aquellas de extrema derecha, como *Cabildo* y *El Caudillo*, (que pronto serían vinculadas al accionar parapolicial de la Triple A), habían conseguido una repercusión inesperada entre aquellos que la consumían “como publicación humorística”...

El tercer momento: la disolución isabelina (julio de 1974-marzo de 1976)

J.D. Perón murió el 1 de julio de 1974. Durante treinta años, su liderazgo marcó la historia política argentina con un fuerte sello personalista. Su muerte no podía sino causar una honda conmoción en todo el país. A la hora de despedir sus restos mortales, Ricardo Balbín, el máximo dirigente de la UCR y eterno rival del Justicialismo, manifestó con sentido dolor: “Este viejo adversario despide hoy a un amigo. Y ahora, frente a los compromisos que tienen que contraerse para el futuro, porque quería el futuro, porque vino a morir para el futuro, yo le digo señora presidenta de la República, los partidos políticos argentinos estarán a su lado en nombre de su esposo muerto para servir a la permanencia de las instituciones argentinas, que usted simboliza en esta hora”.

Las palabras de Balbín aparecían como el corolario lógico de una política conciliatoria que desde principios de los años 70, Perón había venido desarrollando “hacia afuera”. En efecto, a diferencia de sus dos primeros gobiernos, caracterizados por una política basada en la acentuación de los antagonismos, en esta oportunidad Perón había buscado apoyo institucional, sobre todo en el líder de la UCR. Dicha política se había plasmado en la frase “para un argentino, no hay nada mejor que otro argentino”, que había corregido y reemplazado a aquella máxima célebre, “para un peronista no hay nada mejor que otro peronista”.

Los motivos del acercamiento entre Perón y Balbín no era ajenos al momento que atravesaba el movimiento justicialista, cuyas divisiones amenazaban con quebrar el frágil equilibrio tensional impuesto y apenas controlado por el propio Perón. En este sentido, el consumado líder era consciente de cuán oportuno y valioso podía ser el apoyo de aliados externos. Sin embargo, pese a que Perón y Balbín coincidían en la demanda de normalización del sistema político argentino, ambos diferían sensiblemente en su concepción de la acción política. Balbín era un hombre fiel a las clásicas formas de representación partidaria, y por ende, a los límites impuestos por las estructuras. En cambio, Perón era un líder populista, acostumbrado a una modalidad específica de ejercicio del poder, caracterizada por el equilibrio tensional. En labios de Perón, la demanda de

governabilidad significaba, como no podían desconocerlo los diferentes componentes del movimiento peronista, en última instancia, el pliegue de los actores a la voluntad del líder.

Por otro lado, nadie ignoraba el alcance devastador que podían tener la escalada de la violencia al interior del peronismo, ya que éste ocupaba la casi totalidad de campo político argentino. En fin, la oportuna reconciliación llegó a alimentar la idea de que Perón compartiera la fórmula presidencial con Balbín para las elecciones de septiembre de 1974, hecho que quizá hubiese coadyuvado al fortalecimiento del desvalido sistema institucional argentino. Sin embargo, Perón impuso su segunda esposa como candidata a la vicepresidencia, reservando para sí el rol de garante del frágil orden instituido.

Por otro lado, pese a una breve gestión que convalidó el rol de la derecha, tanto como marcó la ruptura con la izquierda, Perón terminó por nombrar como único heredero, en su último discurso, al “pueblo”. Tras su muerte, nada ni nadie podría detener la lucha desatada en las diferentes escenas, a fin de apropiarse del poder y arrogarse de ese modo, el monopolio de la representación del “pueblo”.

Isabel Perón asumió la jefatura del Estado, entrando así al libro de los récords, al convertirse en la primera mujer en el mundo en ejercer constitucionalmente el mandato supremo de un país. El panorama que se abría frente a ella aparecía cargado de incertidumbre. Un rápido balance de la inconclusa gestión de Perón, arrojaba un cúmulo de asignaturas pendientes, entre las que se contaba el pacto social, cada vez más tambaleante, en un clima de creciente conflictividad social y violencia política. El gobierno de Isabel acentuó estas líneas, al tiempo que impulsó una inflexión importante en términos políticos-económicos. En efecto, su política apuntó a la consolidación de un proyecto ultramontano, que preveía no sólo la exterminación total del ala izquierdista sino también la disolución del modelo nacional-popular, mediante la subordinación del histórico actor del modelo peronista, el poder sindical.

La figura que encarnó uno de los proyectos de la extrema derecha, José López Rega, fue uno de los personajes más oscuros y siniestros de la política argentina de todos los tiempos. Durante años, alternó sus funciones de policía, adonde sólo llegó a tener el grado de cabo, con una dedicación cada vez mayor a las ciencias ocultas. En 1965, tuvo su primer encuentro con Isabel Perón, en ocasión del viaje que ésta realizara a la Argentina como mensajera de Perón. Poco después, el “Brujo”, o simplemente “Lopecito”, como lo apodaba socarronamente Perón, desembarcó en Madrid, en la quinta Puerta de Hierro, acumulando funciones cada vez más influyentes, desde el rol de mayordomo hasta el de secretario personal. “El Rasputín de las Pampas”, supo aprovechar los espacios que el propio liderazgo de Perón le fue cediendo en el exilio, cuyo personalismo apareció potenciado a la hora de su declive físico. En efecto, si algo caracterizó a López Rega fue su habilidad para construir una suerte de poder detrás de un núcleo de poder ya personalizado.

Durante el gobierno de Isabel Perón, López Rega -convertido en virtual primer ministro, después de que su cargo como secretario presidencial adquirió, por decreto de principios de 1975, rango ministerial-, no vaciló en utilizar metodologías propias del terrorismo de Estado. Él fue el creador y sostenedor de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), organización clandestina en la cual actuaban elementos policiales y parapoliciales, cuyo objetivo era la eliminación física de sus adversarios a través del asesinato político. Para esos días, *El Caudillo*, órgano vinculado a la Triple A, exclamaba que “El mejor enemigo es el enemigo muerto”. La primera aparición pública de la Triple A

fue en noviembre de 1973, cuando una bomba estalló en el auto del senador por la UCR, Hipólito Solari Irigoyen, quien sobrevivió pese a las graves heridas. Su modus operandi incluía el asesinato selectivo o masivo, la colocación de bombas a locales partidarios, la amenaza pública de muerte a través de la divulgación de listas. Sus víctimas fueron militantes, políticos, intelectuales, artistas, sindicalistas, periodistas, entre ellos el diputado peronista Rodolfo Ortega Peña, el sacerdote tercermundista Carlos Mujica, el intelectual Silvio Frondizi, hermano del expresidente, o el anteriormente vicegovernador de Córdoba Atilio López. Según cifras de la Conadep, la Triple A fue responsable de 19 homicidios en 1973, 50 en 1974 y 359 en 1975.

El período trajo consigo el golpe de gracia para la izquierda peronista. Así, en una última tentativa por salir de su creciente aislamiento, sectores allegados a La Tendencia impulsaron la apertura de un frente político a través de la creación del Partido Auténtico, que participó de las elecciones provinciales en Misiones. Sin embargo, poco después de su conformación, los representantes del Partido Auténtico fueron expulsados del Movimiento Justicialista. En el orden sindical, la política de Isabel supuso también altos niveles de represión, como lo prueba el conflicto protagonizado por la seccional metalúrgica de Villa Constitución, encabezada por Alberto Piccinnini, a raíz de las huelgas desatadas en tres fábricas importantes, Acindar, Marathón y Metcon. Este conflicto, cuyas dimensiones superan ampliamente la cuestión intra-sindical, sería resuelto por la intervención de las fuerzas policiales en 1975, a la que seguiría una cruenta represión y el encarcelamiento de los principales dirigentes.

Por otro lado, el autoritarismo gubernamental apuntó al cierre de los canales institucionales a través del ejercicio sistemático de la censura, cuyo blanco predilecto fueron los medios de comunicación. La depuración ideológica alcanzó los claustros académicos, mediante el nombramiento de Alberto Ottalagano como interventor en la Universidad de Buenos Aires. En defensa del verdadero justicialismo, este personaje octagenario y admirador de Hitler, asumió una cruzada en “contra del marxismo”.

En definitiva, en su avanzada represiva, la extrema derecha apuntaba a ampliar su poder, desequilibrando las relaciones existentes al interior del régimen populista. Pero a esa altura de los acontecimientos, su mayor adversario no era la izquierda política o cultural, la que, sin mayores posibilidades de desarrollar actividades legales, se hallaba cada vez más acorralada entre la opción del repliegue o el lanzamiento a la lucha armada. El gran adversario que restaba en pie era el sindicalismo peronista, la histórica columna vertebral, otro de los beneficiados por las nuevas condiciones políticas.

Nuevas querellas internas

Desde el comienzo del tercer gobierno justicialista, los sindicatos peronistas conducidos por los representantes “duros” de las 62 organizaciones, habían obtenido una serie de triunfos que volvieron a confirmar todo su poder. Además de neutralizar los conflictos intrasindicales, mediante la exclusión de los dirigentes del sindicalismo antiburocrático y de izquierda, éstos apoyaron el desplazamiento de los últimos gobernadores ligados a la Tendencia, como Martínez Baca en Mendoza, Cepemic en Chubut y Ragone en Salta.

Después de la muerte de Perón, la cúpula sindical peronista decidió también arremeter contra el autor del pacto social, el ministro de economía, José Bel Gelbard, socavando su debilitada autoridad. Los avatares de esta confrontación pusieron en evidencia “hasta dónde podía llegar el sindicalismo peronista en la lucha interna por el poder” (J.C.Torre: 1989). Para ello, no vaciló en desconocer uno de los ejes centrales del programa reformista, pese a que poco tiempo después le tocaría defenderlos, en el momento de enfrentar la sorpresiva embestida oficial, encabezada por López Rega.

Así, a la hora de profundizar un plan económico Gelbard se quedó sin fuertes apoyos políticos. La situación se tornó insostenible cuando el ministro encaró una nueva fase del programa económico, que incluía la reglamentación de las inversiones extranjeras, una parcial nacionalización del comercio exterior y una ley agraria, que apuntaba a lograr un incremento de la productividad en el agro. El detonante que causó su definitivo alejamiento fue la prematura divulgación del anteproyecto de ley agraria, que dictaminaba en uno de sus puntos la pérdida del dominio de las tierras incultas o improductivas. Como era de esperar, este proyecto de ley contó con el repudio de la Sociedad Rural, que no vaciló en hablar de proyecto de “expropiación”, al tiempo que obtuvo un primer respaldo de la CGT. Sin embargo, de manera sorpresiva, a mediados de octubre de 1975, la CGT declaró que apoyaba la iniciativa oficial, pero no avalaba el anteproyecto difundido por la prensa (idem, p.111-112) Sin el apoyo de los sindicatos, el proyecto de Gelbard quedaba a merced de las presiones de los grandes propietarios. Finalmente, el proyecto fue abandonado y hacia fines de ese mismo mes, Gelbard presentó la renuncia, luego del anuncio de la presidenta a una nueva convocatoria a paritarias. J. Gómez Morales, un prestigioso economista proveniente de las filas del peronismo histórico, lo reemplazaría.

El último conflicto intra-peronista enfrentó a los gremialistas con la figura todopoderosa de José López Rega. Ciertamente es que las fricciones habían comenzado desde el día mismo de la muerte de Perón, momento en el cual el ministro y consejero blanqueó su condición de protagonista estelar, desdibujando el papel de los peronistas históricos. Agreguemos a esto que en diciembre de 1974 los sindicalistas recibieron con estupor el anuncio de la repatriación de los restos de Evita, en una operación ejecutada íntegramente por López Rega. Este hecho ilustraba cómo López Rega y su séquito iban apropiándose de la simbología peronista para dotarse de una legitimidad que, en rigor, razonaban los sindicalistas, les pertenecía sólo a ellos. La desconfianza era, sin embargo, recíproca, pues, a lo largo del exilio, Isabel y López Rega. habían sido testigos privilegiados de las hesitaciones de los sindicalistas. En otro orden, López Rega nunca había ocultado su ambición por controlar los fondos de las poderosas obras sociales sindicales. Ahora bien, pese a las tensiones iniciales, los gremialistas, de la mano de las 62 organizaciones conducida por Lorenzo Miguel, se encargaron de dar claras muestras de lealtad al gobierno de “La Señora”.

Mientras tanto, durante 1975 la situación económica continuó degradándose. El ministro Gómez Morales, luego de arduas negociaciones con los sindicatos estableció un incremento salarial del 38%, para hacer frente a la devaluación y el aumento de los precios. Sin embargo, el aumento no fue convalidado y Gómez Morales terminó siendo reemplazado por Celestino Rodrigo, conspicuo miembro del entorno presidencial. Pese a su brevedad, la gestión de Rodrigo marcó una inflexión de talla. En efecto, éste aplicó drásticas medidas de ajuste que implicaron una devaluación del 100% y un aumento brutal de las tarifas de los principales servicios públicos que, en algunos casos, llegó al 200%.

El plan económico impulsado por Rodrigo era sumamente ambicioso pues implicaba una reorientación económica fundamental que ponía fin a la política económica nacionalista y reformista, característica del peronismo, para dar paso a una política de estabilización y ajuste. El giro radical operado en la economía traducía el esfuerzo del círculo lopezrreguista por concretar una nueva alianza con los poderosos grupos económicos, excluyendo a los grandes sindicatos de la CGT. A fin de garantizar su respaldo, López Rega y la presidenta se habían acercado también a las jerarquías militares.

El “rodrigazo”, suerte de primer golpe hiperinflacionario en la historia del país, no pudo menos que provocar una sorpresa generalizada en la opinión pública. Por su parte, desconcertados tanto por la rapidez como por el carácter drástico de las decisiones, los líderes sindicales se encargaron de denunciar que el plan propuesto era ajeno al modelo de la concertación social que pregonaba la tradición peronista, al tiempo que iniciaron las tratativas habituales para obtener un reajuste salarial. Luego de varios forcejeos, obtuvieron un aumento medio del 160%. El 24 de junio, Lorenzo Miguel convocó a los trabajadores metalúrgicos a una concentración en Plaza de Mayo. Bajo el motivo aparente de “agradecer” a la presidenta el aumento, su fin no era otro que obligar a ésta a la homologación de las paritarias. Sin embargo, rumores posteriores comenzaron a poner en cuestión la convalidación del aumento. El estado de tensión e incertidumbre se prolongó unas semanas, pese a que el 27 de junio la CGT realizó el llamado a una gran marcha en contra del ajuste. Sin embargo, la reacción espontánea de las bases desbordó a las estructuras sindicales y frente a un país paralizado, la CGT resolvió cruzar el Rubicón y convocó así a un paro general de 48 horas, para el 7 y 8 de julio. Nunca antes la CGT había decretado una huelga general bajo gobierno peronista.

La multitud reunida en Plaza de Mayo pidió la cabeza de Rodrigo y de López Rega. Obligado a dimitir, López Rega, ministro récord del período, con 768 días en el poder, partió días después rumbo al exterior, en misión diplomática. Recién el 20 de diciembre de 1975 el gobierno pediría su captura internacional. Finalmente Lopez Rega regresaría al país un 13 de marzo de 1986, luego de ser detenido por el FBI en el aeropuerto de Miami. Moriría en la cárcel, antes de que se dictara la sentencia judicial en su contra.

Volviendo al teatro de los hechos, recordemos que, pese a que los sindicalistas habían buscado eludir la confrontación con el gobierno de Isabel, ésta finalmente se tornó insoslayable. En su afán por mantener la lealtad aún en medio del cuestionamiento, los sindicalistas articularían una versión atenuada de la teoría del cerco: “La señora – dirían entonces- está mal aconsejada”...

Después de la renuncia de López Rega, el gobierno de Isabel, buscó apoyarse sobre la ortodoxia sindical y el peronismo político. Pero en medio del agravamiento de la situación económica y de la escalada de la violencia política, continuaría por poco tiempo más su marcha errática. Así, el modelo nacional-popular naufragaba, no sólo devorado por el agravamiento de las constricciones externas, sino sobre todo, a raíz de las luchas que se habían desatado al interior del movimiento. Fracturadas las alianzas sociales que lo habían hecho posible, carente de un liderazgo que asegurara su rehabilitación, la suerte parecía estar definitivamente sellada. Pronto, la soledad de Isabel evidenciaría el vacío de poder. La escena se aprestaba a ser ocupada por otros actores.

De la deriva de las organizaciones armadas al terrorismo militar

El país iba deslizándose cada vez más por una pendiente incontrolable de violencia, de la cual eran responsables los grupos de extrema derecha, activados desde el gobierno, así como las agrupaciones armadas de izquierda. Las estadísticas muestran que durante el solo año de 1975, la cantidad de asesinatos políticos, debido tanto a la represión ilegal como a la violencia guerrillera, alcanzó la cifra de 860 personas.

Desde la izquierda armada, una de las características del período es que las principales organizaciones armadas, ERP y Montoneros, fueron subordinando la estrategia política a la lógica militar. Tanto la significativa reducción del espacio de la política institucional como la primacía de una lógica militarista tuvo graves consecuencias, pues creó nuevas oportunidades para el regreso y religitimación de las Fuerzas Armadas.

Quizá este proceso de militarización se expresa con mayor nitidez es en Montoneros, pues ésta había articulado durante un breve período una de las organizaciones de masas más poderosa del continente. Una vez consumada la ruptura con el gobierno peronista, la agrupación incrementó sus acciones armadas, mediante secuestros exthorsivos (como el de los hermanos Born, realizado en septiembre de 1974, que reportaría la millonaria cifra de 64 millones de dólares), así como a través de la eliminación física de sus enemigos políticos. En suma, Montoneros fue produciendo estructuras de organización con características de ejército regular (compañías, pelotones), de manera que, una vez establecida la prioridad de estos aparatos, el compromiso obligaba a sus seguidores, por encima de sus niveles iniciales de compromiso, a convertirse en milicianos. Por último, en septiembre de 1975, en un gesto político inusual, la cúpula de Montoneros decidió su autoproscricción del marco de la legalidad, anunciando su voluntario pase a la clandestinidad. Poco después, la organización fue declarada ilegal por el gobierno constitucional de Isabel Perón.

La política de superficie del ERP fue considerablemente menos intensa que la de Montoneros, pese a que en el campo político contaba con el Frente Antiimperialista por el Socialismo (FAS), en el gremial con el Movimiento Sindical de Bases (MSB), al tiempo que realizaba una labor progandística a través de periódicos como *Estrella Roja*, *Nuevo Hombre* y también a través del diario *El Mundo*. Liderados por el mítico guerrillero, M. R. Santucho, el ERP planteaba la “guerra social revolucionaria” en dos frentes. Por un lado, desde 1974 sus acciones militares apuntaban directamente al ejército. Ya hemos consignado que en enero de 1974 el ERP dispuso el ataque a la guarnición militar de Azul, hecho que tuvo importantes consecuencias políticas. La acción militar tenía tanto el propósito de conseguir armamento para la guerrilla rural como de probar a los trabajadores la capacidad de la organización para liderar la guerra revolucionaria. Por último, el ataque también se proponía provocar al gobierno, a fin de generar en éste una respuesta que pusiera al descubierto la verdadera naturaleza represiva del régimen peronista, como defensor de las Fuerzas Armadas. Tal como esperaba Santucho, el gesto realizado por Perón abrió la puerta para una reconciliación con el ejército argentino, al tiempo que privó a la izquierda de un aliado importante, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, O. Bidegain, quien mantenía fluidos vínculos con la Tendencia. En definitiva, por la vía armada, el objetivo del ERP apuntaba a la agudización y estallido de las contradicciones existentes en diferentes contextos y escenas. Las consecuencias de esta orientación dieron cuenta de una creciente y

rápida unidimensionalización de las escenas, en provecho de una lógica militar, situación que no tardaría en verse multiplicada en una serie incontrolada de efectos perversos.

Fue también en 1974 que el ERP decidió abrir un frente de guerrilla rural en la provincia de Tucumán. A raíz de ello, en mayo de 1975, el poder ejecutivo ordenó por decreto la intervención del ejército en esa provincia, con el fin de “neutralizar y/o aniquilar” a las fuerzas guerrilleras que allí actuaban. Esta intervención militar tuvo como eje la represión clandestina, que pronto comenzó a cobrar las siniestras formas de la desaparición y la tortura, tácticas inspiradas en los manuales de contrainsurgencia difundidos por el departamento de estado norteamericano. La conducción del ERP respondió a esta estrategia de represión clandestina exigiendo el trato de un ejército enemigo, de acuerdo a las convenciones internacionales. Así, con el propósito de forzar a las fuerzas armadas al respeto de las reglas bélicas internacionales, el ERP inició una política de represalia, adoptando la determinación de no tomar prisioneros vivos, hasta tanto el ejército no lo hiciera. Sin embargo, en diciembre de ese año, luego del asesinato accidental de una niña, abandonó dicha política. Ese mismo mes de 1975, en un vasto operativo, el ERP llevó a cabo el intento de copamiento del regimiento de Monte Chingolo que culminó en el aniquilamiento de gran parte de las fuerzas guerrilleras intervinientes.

Por otro lado, las acciones cada vez más espectaculares de la guerrilla urbana, progresivamente orientadas contra las fuerzas militares, así como la emergencia de un foco de guerrilla rural en Tucumán, brindaron la posibilidad que el ejército buscaba desde hacía un tiempo: recuperar su papel como salvador de la Patria y aplicar de manera discrecional las tácticas de contrainsurgencia. Así, la ejecución del “Operativo Independencia” tuvo por eje una estrategia de propaganda y de información destinada a la opinión pública, en la cual se distorsionaba deliberadamente el número de enfrentamientos, las bajas y guerrilleros involucrados. Comandados por el general Vilas primero, luego por el general A. Bussi, el ejército argentino desembarcó con un contingente estimado en unos 4000 hombres, a fin de derrotar “en una guerra” a un ejército guerrillero que apenas si llegó a contar con 160 milicianos.

A esto hay que agregar que el poder decisional de las fuerzas armadas se vio acrecentado en la última etapa del debilitado gobierno de Isabel, caracterizada por un creciente vacío de poder, pese al apoyo del sindicalismo ortodoxo.

El golpe de estado llegaría el 24 de marzo de 1976. Después de esa fecha nada sería como antes. Se abría así un período completamente nuevo y uno de los más nefastos de la historia argentina, en el cual la represión política y el terror casi demencial irían acompañados por una fuerte reorientación económica. Sus consecuencias multiformes se harían visibles en la década siguiente, tanto a nivel de la estructura social como en la conciencia política de los argentinos.

El Ethos de los setenta

En nuestro país, gran parte de los militantes políticos ingresaron a la política entre 1959 y 1969, esto es, bajo el signo de la revolución cubana y al calor de la movilización iniciada por el *cordobazo*. En sólo diez años el horizonte de los posibles históricos pareció ampliarse aceleradamente. En ese contexto, la violencia se fue dotando de una eficacia

mayor, pues ya no emergía como algo eventual, ritualizado en el activismo o en las “riñas” entre patotas sindicales, sino como el eje de una práctica organizada y sistemática para la toma del poder. Más aún, bajo un régimen autoritario y represivo, la violencia aparecía cargada con un suplemento de legitimidad. Era la “violencia desde abajo”, una respuesta a la “violencia de Estado”. En otros términos, la posibilidad del *cambio revolucionario* formaba parte del sentido común de importantes sectores progresistas de la sociedad argentina.

Pero había también otras formas de acción y movilización que se articulaban con la afirmación de la necesidad del cambio revolucionario: las manifestaciones, las pintadas, la acción barrial, la militancia en las villas. Combinados, estos repertorios de acción fueron definiendo los marcos sociales y culturales a partir de los cuales toda una nueva generación de militantes se dotó de una identidad política.

El ethos de los '70 se caracterizó entonces por la desconfianza en las vías reformistas y el desprecio por el sistema partidocrático, en suma, por el compromiso revolucionario. Su encarnación más acabada fue la figura del militante político, definido por una "mística" revolucionaria, vale decir por un compromiso que se postulaba como permanente y radical.

Ahora bien, en términos de militancia, el ethos del '70 tuvo dos inflexiones mayores. La primera, específicamente “movimientista” fue ilustrada por el multifacético frente bautizado con el nombre de La Tendencia, conducido por Montoneros; frente que, como hemos visto, desbordaba ampliamente el marco propio del sistema democrático-populista y amenazaba la estabilidad del régimen recién instaurado. Nada ejemplifica mejor este talante movimientista que las “tomas” realizadas durante la corta primavera camporista, época en la cual coincidieron el máximo grado de *movilización con la máxima aspiración al cambio*.

La segunda inflexión, propiamente “militarista”, fue encarnada, de manera paradigmática, por la organización Montoneros. Lo peculiar de esta lógica de acción “militar” no es que suponía la exclusión del adversario, sino más bien, que ésta fue alimentada por una determinada concepción y práctica de la política, asentada ella misma sobre una interpretación específica de la historia argentina. Esta lectura afirmaba la existencia de dos líneas antagónicas que recorrían la historia argentina, cristalizadas durante largo tiempo por la oposición peronismo/antiperonismo. La continuidad de la historia desde la época de la fundación de la república moderna aparecía como un hilo conductor, por lo cual cada etapa, cada lucha, encontraba su superación dialéctica en momentos posteriores. Pero, sobre todo, la lucha, a medida que se hacía más violenta, iba desnudando a los verdaderos protagonistas al tiempo que implicaba una mejor visualización de los objetivos. Por otro lado, este dispositivo binario fue potenciado por la visión marxista de la época, como lo muestran la tesis de la agudización de las contradicciones. Finalmente, a medida que los actores políticos ligados a la Tendencia eran marginados de la escena política por el propio Perón, o sus militantes asesinados por comandos de extrema derecha, la conducción de Montoneros iba profundizando las implicaciones de este dispositivo binario. La violencia, definida como necesaria, vista como irreductible, alcanzaría entonces momentos de verdadero paroxismo.

Por otro lado, el progresivo enclaustramiento de Montoneros en una lógica terrorista no hizo sino acentuar su alejamiento de aquellas masas que decía representar. El recorrido posterior de la organización, sobrevinida con el exilio de sus líderes máximos, sus

sucesivas escisiones, su contraofensiva suicida, sus delirios mesiánicos, confirmarían de manera especialmente sórdida y patética los efectos perversos de esta lógica de acción.

Pero, de manera ejemplar, este dispositivo ideológico binario también subyacía en las consignas políticas de la época, las que pasaron a ocupar un lugar fundamental en la contracultura de los setenta. El hecho no es casual, pues las consignas tenían la capacidad de articular en unas pocas ideas-fuerza las ofertas ideológicas del período, al tiempo que podían expresarlas bajo la forma de oposiciones irreductibles o de enunciados dicotómicos. De esta manera, tópicos referidos a la “Liberación nacional”, la “Revolución”, el “Socialismo”, la “Dependencia”, la construcción del “Hombre nuevo”, fueron nutriendo los ejes de cualquier discusión ideológica, facilitando el rápido desliz hacia una lógica lineal y el reduccionismo político.

Sin embargo, por encima de la existencia de un dispositivo binario poderosamente reductor, la deriva militarista en la que incurrieron las dos máximas organizaciones guerrilleras, Montoneros y ERP, no puede ni debe ser asimilada a la lógica del terror militar, instituido desde el Estado. Así, nada más falso que la hipótesis de “los dos demonios”, tan difundida durante los años ‘80. Una vez más, hay que subrayar el rol que cumplió la “guerra” desarrollada contra las huestes del ERP en Tucumán. Apelando al recurso del sobredimensionamiento del enemigo, la “guerra” fue efectivamente inventada, convertida en un laboratorio que pondría a prueba el modelo represivo, basado en la detención, el secuestro ilegal, la tortura y la desaparición. Los primeros campos clandestinos de detención fueron creados en Tucumán, en el contexto de la guerra contra la guerrilla, la que a fines de 1975 ya estaba militarmente derrotada. Así, el modelo no sólo sorteó exitosamente el ensayo de laboratorio, sino que, una vez desplazado el débil gobierno de Isabel Perón, se hizo susceptible de una generalización inmediata desde el control absoluto de los resortes del Estado.

Por otro lado, el pasaje de la dimensión movimientista a su inflexión militarista no puede comprenderse sin referencia a la guerra que se libraba al interior de las diferentes escenas del poder: las sucesivas purgas internas, el incremento de la violencia, en fin, la represión desmedida y el caos económico que envolvieron el período que va de 1973 a 1976, contribuyeron a multiplicar tanto el desencanto como el creciente temor, obligando a vastos sectores anteriormente movilizados al repliegue y la deserción. La fase isabelina del gobierno señala sin duda la gran decepción, así como anticipa el terror militar. Lejos estamos ya de aquella época en la cual un porcentaje importante de la población justificaba la violencia de la guerrilla como herramienta legítima frente a un régimen autoritario. Lejos también del lenguaje triunfalista que acompañaron a las masivas manifestaciones, antes y durante la primavera camporista. Lejos del fervor revolucionario que proyectó la articulación de una parte de las clases medias movilizadas con las clases trabajadoras peronistas.

Finalmente, nada sería más errado que intentar reducir el ethos de los ‘70 a través de su sola faz oscura o buscar comprenderlo desde la perspectiva ideológica de otras épocas, como han pretendido hacer ciertos ensayos que cuestionan el déficit político de los ‘70 desde posiciones que asumen la defensa del régimen democrático, revalorizado a partir de los ‘80. Solo la comprensión y, a la vez, el distanciamiento crítico, pueden devolvernos las claves de una época que está menos marcada por el déficit político y más, mucho más, por la creencia en el cambio, a la vez que por la afirmación de la violencia como herramienta de

lucha y transformación social. Más simple, una época caracterizada por el exceso de pasión política.

Bibliografía Resumida

E.Anguita y M.Caparrós, (1997), *La Voluntad. Una historia de la militancia revolucionaria en la Argentina 1973-1976*, vol.II Buenos Aires, Norma.

Anzorena, (1998), *Tiempo de violencia y utopía. Del golpe de Onganía al golpe de Videla*, Buenos Aires, ed.del pensamiento nacional.

R.Baschetti (comp.), (1999), *Documentos, 1973-1976*, II vol., Buenos Aires, Ed. de la Campana.

M.Bonasso, (1997), *El presidente que no fue*, Buenos Aires, Planeta.

L.De Riz, (2000), *La política en suspenso, 1973-1976*, Buenos Aires, Paidós.

G.Di Tella, (1983), *Perón-Perón, 1973-1976*, Buenos Aires, Hyspamérica.

D. James (1990), *Resistencia e integración*, Buenos Aires, Sudamericana.

R:Gillespie, (1982), *Soldados de Perón. Los Montoneros*. Buenos Aires, Grijalbo.

D.Martuccelli y M.Svampa, (1997), *La plaza vacía. Las transformaciones del peronismo*, Buenos Aires, Losada.

Flavián Nievas, "Cámpora: primavera-otoño. Las tomas", en A. Pucciarelli editor, *La primacía de la política*, Buenos Aires, Eudeba,pp. 351-393.

J.D.Perón, (1988), *1974: Discursos completos*, 4 vol., Buenos Aires, Megafón.

-----s/d, *Actualización política y doctrinaria para la toma del poder*, Buenos Aires, Pevuel edic.

----- (1971), *Conducción Política*, Buenos Aires, Freeland..

----- (1985), *Tercera Posición y Unidad Latinoamericana*, Buenos Aires, Biblos

J.C.Portantiero, (1979), "De la crisis del país popular a la reorganización del país burgués", en Cuadernos en marcha, Argentina, la Gran frustración, segunda época, año 1, nro 2, México.

A.Rouquié (1982) "hegemonía militar, Estado y dominación social", en A.Rouquié (comp.), *Argentina Hoy*, México, siglo XXI.

M.Seoane, (1992), *Todo o nada. La historia secreta y la historia pública del jefe guerrillero M.R.Santucho*, Buenos Aires, Planeta.

S. Sigal y E. Verón, (1986), *Perón o muerte. Los fundamentos discursivos del fenómeno peronista*, Buenos Aires, Legasa.

J. C. Torre, *Los sindicatos en el gobierno, 1973-1976*, (1989), Buenos Aires, CEAL.

M.C.Torti, (1999), "Protesta social y "Nueva Izquierda" en la Argentina del Gran Acuerdo Nacional", p.212, en A.Pucciarelli, editor, *La Primacía de la Política*, Buenos Aires, Eudeba, p. 205- 231.

Todo es Historia, veinte años, (1987), Anuario, nro n240,.

Todo es Historia (1998), EL Brujo, nro 375.

Todo es Historia (1990), Cultura y Sociedad en los '60, nro 280.

H.Verbitsky, (1986), *Ezeiza*, Buenos Aires, Contrapunto.

L.Vincens, (1983), *Lopezrreguismo y justicialismo*, Buenos Aires, El Cid editor.

Diario La Opinión, 1974.